

Uruguay en la hora del lobo

Claudio Trobo Claudio Trobo. Escritor y periodista uruguayo. Novelas publicadas: "Sin Horizonte", "El Invitado", "Ciudad al Sur", "Junto a lo Anterior", "Dorsal Diez", "El Trabajo del Gato". En preparación: "Caza Mayor e Historias de Amor y Burguesía". Ha estado al frente de varias redacciones, entre ellas la de los clausurados diarios uruguayos "Ya", "El Eco", "Ultima Hora" y "La Opinión" Se ha desempeñado profesionalmente en Uruguay, Italia, España y Venezuela.

Nueve años después del golpe de Estado de junio de 1973, el ejército uruguayo retacea el diálogo aperturista que dice alentar, mientras busca imponer su lenguaje para edificar un estatuto legal que permita un control militar más férreo sobre las instituciones futuras del país. Enfrentado a todas las fuerzas productivas, a los principales grupos políticos y a una situación económica descontrolada, el régimen continúa prisionero del capital financiero, de sus compromisos y de una represión que periódicamente se hace más implacable.

El Estatuto de los Partidos Políticos uruguayos y los pasos que se deriven de él, constituyen hoy, más que una instancia en un diálogo franco de apertura, el primer capítulo en la aplicación de otro cronograma gestado y resuelto dentro de las esferas militares del país. Prácticamente ninguna de las propuestas democratizadoras llevadas a la mesa de conversaciones por parte de los delegados de los partidos políticos autorizados, han quedado consagradas en el texto enviado al Consejo de Estado para su promulgación.

El Estatuto, que fuera estructurado por las Fuerzas Armadas, adiciona los aspectos más limitativos del conjunto de los anteproyectos debatidos durante el año último. Niega la existencia y posibilidad de actuación del Frente Amplio y sus sectores constitutivos - Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Comunista y grupos desprendidos de los llamados partidos tradicionales - y restringe la actividad al Partido Nacional, al Partido Colorado y a un pequeño sector denominado Unión Cívica. Esa ley orgánica pretende además, no sólo perpetuar la ilegalización de grandes corrientes de opinión, sino que mantiene la gran mayoría de las proscripciones aplicadas a todos los que fueron candidatos a cargos electorales en los últimos 16 años, y crea condiciones tales, que hace prácticamente imposible el establecimiento futuro de nuevas organizaciones políticas.

De acuerdo con el Estatuto aprobado, el 28 de noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones internas de las agrupaciones políticas permitidas, a fin de escoger sus autoridades. Esta elección, como todo el proceso de elaboración de las nuevas disposiciones, se habrá de realizar en medio de una situación erizada de dificultades. La proscripción de la gran mayoría de los líderes políticos más distantes del régimen dentro de los partidos aceptados, pretende asegurar el triunfo o la primacía de quienes puedan ser más cabalmente manejados por el gobierno militar y sus fuentes de poder, mientras el dócil Consejo de Estado - Parlamento designado nominalmente por el propio poder ejecutivo - hacía pequeños ajustes

retóricos al proyecto, el general Julio César Rapela, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las FF.AA. (Comaspo) - verdadera autora del Estatuto - pronunciaba amenazantes declaraciones contra los dirigentes políticos que criticaban la acción del gobierno. Anunció que si seguían levantándose voces en favor de un pluralismo que incluya a todos los sectores de opinión, el proceso de "apertura" sería clausurado. Agregó que "nadie había invitado a los políticos a participar en la cosa pública". Sus palabras fueron respondidas de inmediato por el Partido Nacional, quien al rechazar el temperamento, dijo que "jamás habrá de asumir ninguna función ni responsabilidad de gobierno que no le confíe el pueblo soberano". Líderes del Partido Colorado hicieron conocer sus declaraciones en el sentido de que "criticar la política económica del gobierno no invita a la sublevación, sino que apenas constituye el derecho a pensar".

Pero las palabras de Rapela no estuvieron aisladas. El propio presidente Gregorio Alvarez recordó que, con anterioridad, el ministro del Interior, general Yamandú Trinidad, había emitido conceptos similares. Y agregó que Rapela "habla muy buen español y ha sido suficientemente claro. Su palabra constituye la voz oficial del gobierno. El tema de la apertura prefiero no tocarlo más, porque todo lo que hay que decir ya se ha dicho".

El que pierde gana

El proceso político uruguayo tomó nueva vitalidad cuando el 30 de noviembre de 1980 el gobierno realizó un plebiscito para presentar al pueblo un cronograma que iba a pautar la "apertura" de acuerdo a como la concebían la cúpula militar y los sectores allegados a ella. Pese al clima de represión y a las dificultades que tuvieron los opresores para movilizarse, el pueblo uruguayo hizo conocer masivamente su opinión contraria al proyecto propuesto. El plebiscito - así lo habían concebido los círculos oficiales - era en realidad un "voto de confianza" planteado a la ciudadanía sobre los logros del gobierno militar.

El resultado, impensado por los impulsores de la consulta, acrecentó las fisuras en el tren oficial. A la sombra de intereses económicos y políticos, de publicitados fraudes y negociados, rodaron algunas cabezas, y el general Alvarez, pletórico de ambiciones, se hizo de la presidencia. Terminaba así la etapa de los mandatarios nominales que eran manejados desde la sombra. Pero el triunfo de Alvarez no calmó los ánimos. Es que el descontento generalizado del pueblo uruguayo, en sus más diferentes sectores, se vio potenciado cuando se supo el resultado de la consulta.

Si bien las principales autoridades dijeron por ese entonces, que quien había perdido con la votación era el pueblo, los militares no tuvieron otra alternativa que abrir un diálogo. Las conversaciones con los líderes políticos - alguno incluso proscripto surgieron y se desarrollaron en un clima de amenaza e imposición. Paralelamente las tensiones y enfrentamientos entre el gobierno y los distintos grupos económicos y sociales se han ido acrecentando.

Las principales organizaciones productivas del Uruguay - la Federación Rural y la Cámara de Industrias - se han opuesto enfáticamente al gobierno, pues la situación económica del país continúa agravándose sin cesar. El empobrecimiento y la inviabilidad de la actividad agropecuaria, ha resentido lo que durante toda la historia del Uruguay constituyó el motor de la economía nacional. El cierre constante de industrias provocó un "estado de emergencia" en todo el espectro manufacturero del país. El dólar, pese a ser contenido artificialmente, ha seguido su desmesurado ascenso. El número de desocupados ha crecido, a la par que el salario real ha seguido perdiendo terreno cotidianamente. Los intereses del dinero han sobrepasado el 60 por ciento anual y la actividad financiera ha devorado todo el sector productivo. La maquinaria del Estado ha sido cada vez más onerosa e ineficiente.

El gobierno, prisionero de su política económica y sus compromisos, ha vuelto a recrudescer su actividad represiva ante una situación cada vez más descontrolada. A la luz del resultado de plebiscito y de un empuje democratizador difícil de contener, y pese a los amenazantes controles oficiales, surgieron algunos órganos de prensa independientes - o vinculados a algunas agrupaciones políticas - que plantearon con claridad la índole de los problemas que confronta el país. La clausura, moneda corriente en los años anteriores, también ha intentado diezmar a esta renaciente prensa opositora.

En tanto, las autoridades hablan de apertura, en estos últimos meses la represión ha recrudescido y la tortura ha cobrado nuevas vidas. Ciudadanos de la oposición han desaparecido o han sido metidos en prisión. Dirigentes sindicales y militantes políticos fueron encarcelados, pese a lo cual se registraron numerosas asambleas de trabajadores y una huelga de transporte conmovió Montevideo. Un millar de bancarios reunidos reclamó la plena vigencia de los derechos sindicales, en medio del acrecentamiento de los niveles de resistencia popular.

El ministerio del miedo

Fuera de las fronteras del país también las fuerzas represivas uruguayas continuaron su trabajo. En Buenos Aires se registraron múltiples episodios de este tipo, la prensa europea denunció la sostenida acción policial uruguaya en algunas ciudades, y los servicios de espionaje de Montevideo están más activos.

Ante esta controvertida situación el gobierno ha tratado de congelar todos los frentes que tiene abiertos y el Estatuto de los Partidos Políticos parece ser un primer paso en el camino de un cronograma, que seguiría en 1983 con una proposición de un proyecto constitucional mediante el cual las fuerzas armadas pudieran legalizar la tutela sobre las instituciones civiles.

No obstante todas las argucias y cortapisas oficiales puestas al proceso de cambio, las fuentes de gobierno se sienten inseguras, pues la propia dinámica de los hechos parece desbordarlas tan pronto hacen la más mínima concesión. Y tratan en-

tonces de restringir aún más las posibilidades del diálogo. Consejeros allegados al presidente Alvarez - como Carrera Hughes - propusieron constituir una comisión de "grandes figuras" para evitar las elecciones internas de los partidos tradicionales y no correr el riesgo en la elección de los dirigentes que estarán al frente de las colectividades autorizadas. Estas elecciones son en sí definitorias de los posibles pasos futuros de estos partidos, pues en Uruguay las dos más grandes organizaciones políticas no han significado precisamente un ejemplo de unidad, y en ellas han coexistido sectores liberales y conservadores, hombres de centro y de extrema derecha.

El fantasma del plebiscito está hoy más presente que nunca en algunos sectores oficialistas. El inefable diario "El país" ha sentado prédica con sus temores. Editorializa sobre la posibilidad de que las elecciones internas sean "un nuevo noviembre de 1980, con un pronunciamiento contra el proceso aún más severo". Y dice que ello pondría en entredicho las elecciones previstas para el 84.

Los restringidos comicios de este año, limitados en sectores políticos y posibilidad de candidatos, dejarán afuera a grandes contingentes de votantes a la par que contarán con una importante legión de nuevos ciudadanos que recién ahora accederán al voto. Ha habido ya - con respecto a los jóvenes - protestas de algunos sectores, que han denunciado la lentitud oficial para registrar las nuevas inscripciones, tal vez por temor a la gravitación que tendrá la nueva generación en esa jornada.

Se sabe que las autoridades tratan de incidir por todos los medios en la nueva realidad de los partidos políticos, en su dirigencia y en la forma en que se desarrollarán las elecciones internas. Habrán de sumar a las masivas proscipciones todas las ventajas que otorgarán a los políticos afines y los hostigamientos a quienes les adversan, ya sea mediante la administración preferencial y discriminatoria de los medios masivos de comunicación, o el uso de otros expedientes aún más compulsivos, como los ya puestos reiteradamente en práctica. La preocupación oficial no es la de dar siquiera una libertad restringida, una patente de existencia a las colectividades tradicionales, sino adueñarse literalmente de ellas mediante el control de autoridades dóciles, dando así una apariencia de pluralismo donde no la hay.

Otro elemento a tener en cuenta es la propia figura del general Alvarez. El actual presidente es un hombre de encendidas apetencias políticas que ha maniobrado largamente entre sus pares para obtener el cargo que hoy detenta. La demagogia de sus actitudes ha inaugurado un estilo y son innegables sus deseos de pesar verdaderamente en el proceso por el que la cúpula militar quiere transitar.

A sangre y fuego

De todos modos la oposición continúa buscando abrirse un cierto espacio político, en una nación que ha sufrido particularmente los cambios radicales que han

comprometido profundamente sus estructuras. La interrelación entre el diálogo y los dramáticos hechos económicos que traban todo el desarrollo del país conforman uno de los elementos claves que deben ser resueltos.

El enfrentamiento cotidiano entre el gobierno de fuerza y los distintos sectores económicos y sociales, tiene base fundamental en la erosión de toda actividad productiva. El "modelo" impulsado a sangre y fuego ha dejado en el suelo las estructuras nacionales. Las cifras del propio Banco Central del Uruguay, que circularon como "Indicadores de la Actividad Financiera", recogen las variaciones económicas que ha habido en el país desde el golpe de Estado de 1973 hasta el año último, e ilustran sobre la contaminación general que ha invadido a las más diferentes actividades.

En 1973 - según esa fuente - los bancos oficiales otorgaron el 62.21 por ciento de los créditos al sector privado no bancario, en tanto que la banca privada solamente concedía el 37.39 por ciento. Ocho años después la banca oficial otorgaba el 35.81 por ciento de los préstamos contra un 64.19 de los banqueros privados. Eso significaba lisa y llanamente que los papeles de la banca privada y oficial se han trastocado, hecho que ocurre en medio de un cuadro altamente especulativo, en el que los intereses del dinero han sobrepasado el 60 por ciento anual.

En los depósitos en moneda nacional, si bien los bancos tradicionales del país se han mantenido en los primeros lugares, se ha registrado una consolidación de la banca extranjera. Hay que señalar el papel preponderante del Banco de Pan de Azúcar - comprado por un Banco de Chile que integra el grupo de Javier Viale, ligado a capitales norteamericanos - y del Banco Real del Brasil.

En estos años el desenvolvimiento del capital especulativo ha demandado fundamentalmente el incremento de nuevas casas bancarias, ya que por constitución está prohibida la creación de nuevos bancos. La gran mayoría de estas financieras son de origen extranjero, muchas de ellas de Estados Unidos, Europa Occidental y hasta de Sud Africa.

El documento del Banco Central consigna la variación habida en el precio del dólar. En 1973 el signo norteamericano se cotizaba a 927 pesos viejos por unidad y hoy sobrepasa los 13.550 pesos, y a principios de mayo y hasta el mes de octubre se ha fijado un sistema anticipado de devaluaciones que contemplan un 22% mínimo mensual. Pese a esta vertiginosa devaluación, la paridad actual es artificial y los principales artículos de exportación no pueden salir al mercado internacional por una falta de sinceración en la fijación del precio de la divisa.

Según el mismo informe, el endeudamiento externo del Uruguay alcanzaba a 718 millones de dólares el 31 de diciembre de 1973, y siete años y medio después había sobrepasado los 2,585 millones. De todos modos la cifra ha quedado rápidamente superada, y otras fuentes daban ya para enero de este año, una deuda externa de 3,129 millones de dólares. El dato es impactante, pero tal vez conocido.

Lo que quizá es menos difundido, es la distinta participación de los diferentes sectores en esa deuda. En el mencionado lapso, el sector público - no monetario - acrecentó su deuda en un 236.66 por ciento, el sector privado - no monetario - en 132.73, la banca privada lo acrecentó en la astronómica proporción del 1960.59 por ciento, en tanto que los bancos oficiales disminuyeron su deuda.

Sin incluir los gastos policiales y otras partidas especiales utilizadas en la represión, los egresos del gobierno central en materia de defensa, insumen 18.48 del total del presupuesto. Sanidad se lleva apenas un 5.42 y el 1.84 por ciento se destina para vivienda y servicios sociales. La distribución de estos egresos por funciones se hace siguiendo criterios del Fondo Monetario Internacional.

Crepúsculo desolado

La grave situación económica que afronta Uruguay ha hecho que su ministro de Economía, Valentín Arismendi, anunciara recientemente una reducción de gastos del orden del 20 por ciento para el presente año. Se ha resuelto también la privatización de algunas empresas oficiales, tales como la compañía del gas, industrias pesqueras y dependencias de la Dirección Nacional de Turismo. La política de privatizaciones ha sido una constante en los últimos años.

La situación de crisis de los trabajadores - desocupación y bajos salarios - es tratada con gran modestia por la publicación del Banco Central, y sus cifras son considerablemente menores a las que manejan otras fuentes. No obstante, el informe registra que el índice de salarios se multiplicó por 24 en ese lapso, en tanto que el precio de los combustibles aumentó entre 48 y 74 veces, el transporte 36 y la vivienda 49 veces.

Mientras los depósitos en moneda nacional - cajas de ahorro y plazo fijo - se multiplicaron por 125.46, los depósitos de ahorro en moneda extranjera lo hicieron por 524.25.

En síntesis, el informe del Banco Central señala la pérdida de peso de la banca oficial ante la privada y de la nacional ante la extranjera, la constante y vertiginosa devaluación de la moneda nacional, el incontrolable aumento de la deuda externa - fundamentalmente debida a la banca privada - la preponderancia de los gastos de defensa dentro del presupuesto, y la sostenida pérdida del valor adquisitivo de los salarios ante los precios.

Otras fuentes aportan elementos complementarios sobre el proceso económico. Según un estudio del contador Ricardo Pascale sobre "La empresa manufacturera del Uruguay", en 1978 las 71 empresas que se declararon total o parcialmente extranjeras utilizaban en un 70 por ciento y en forma privilegiada, fuentes internas para sus créditos. Según el mismo estudio, generaban solamente el 11.5 por ciento bruto de la producción industrial, pese a ejercer monopolios en algunos casos.

El diario "El Día" al hacer un pormenorizado análisis de la situación económica del último año anota en primer lugar la disminución del nivel de actividad. El Producto Interno Bruto del Uruguay disminuyó en casi 0.8 por ciento en 1981, como lo reconoció el delegado uruguayo ante la Asamblea Anual de Gobernadores del BID. Según el periódico mencionado el retroceso "obedeció esencialmente a la falta de estímulos que han sufrido los productores en materia de precios, lo que determinó una nueva merma en la rentabilidad, a lo que debe agregarse el nivel crítico de endeudamiento que padece, fundamentalmente el sector pecuario". Otro elemento responsable del estancamiento fue la industria de la construcción, que en 1980 había tenido un impredecible y artificial auge, debido a la afluencia masiva de capitales negros argentinos.

Escribe "El Día" que "unas pocas ramas industriales han logrado mantener su nivel de actividad e influyen sobre el resto que ha caído considerablemente. Sectores como los textiles, el cuero, caucho, materiales de transporte, son los más afectados. Aquí existe una serie de factores determinantes. Fundamentalmente la pérdida de competitividad externa, la fuerte competencia de productos importados, el alto costo financiero, la competencia desleal vía contrabando, la falta de incentivos promocionales, etc., todos han coadyuvado para que el resultado alcanzado sea tan poco alentador".

Señala también que "muchos trabajadores han perdido sus fuentes de trabajo. Otros han pasado al seguro de desempleo y otros han visto disminuir notoriamente sus ingresos". Agrega que nuevamente en 1981 el salario real quedó postergado, situación que se agrava en 1982, año en que los salarios no podían crecer más de un 20 por ciento y en el que se augura una inflación cercana al 40 por ciento.

El periódico señala que la clave de la crisis económica debe buscarse en la tasa de interés. El ministro de Economía reconoció que si no se conseguía abatirla podría haber un verdadero "crac". "El costo del financiamiento se ha vuelto imposible de resistir por ningún tipo de actividad productiva". Acota que de todos modos, "pese al especial atractivo que significan las colocaciones en moneda nacional, con una rentabilidad superior a las de moneda extranjera, los inversores han mostrado clara preferencia por colocaciones en moneda extranjera". Ello se debe a la endeblez de la actual paridad con el dólar. En el último año los depósitos en moneda extranjera crecieron un 69 por ciento respecto al ejercicio anterior, según lo consigna el Banco Central.

Campo de batalla

Algunas voces habían salido a preconizar, ante la actual crisis, una rebaja en los salarios para conjugar parcialmente el déficit de los sectores productivos. El periódico "Democracia" afirma que "en el Uruguay de nuestros días, donde hace más de ocho años no actúan las organizaciones sindicales, y el nivel de retribuciones salariales es dispuesto por el poder ejecutivo, lo que determinó que la clase

obrero uruguayo perdiera el 49% y fracción del valor real de su trabajo, además de otras conquistas obtenidas con tremendo esfuerzo y sacrificio, este tipo de planteamientos es totalmente inaceptable".

La Cámara de Industrias, en una asamblea sin parangón desde su fundación en 1898, proclamó a la industria nacional en "estado de emergencia" y protestó ante la falta de receptividad de las esferas oficiales cerradas al diálogo. Participaron en la asamblea 620 industriales y reclamaron medidas concretas e inaplazables para sacar al país de la recesión, tales como la fijación de una tasa cambiaria realista, la detención del programa de rebaja arancelaria vigente desde el 1° de enero último, la refinanciación de deudas en plazo no menor de tres años - con uno de gracia - a intereses adecuados, y un estímulo real para las exportaciones.

Se ha agudizado paralelamente el enfrentamiento entre el gobierno y la Federación Rural. Los productores han ido sumando asambleas para hacer conocer los graves problemas que afronta la actividad agropecuaria, y no han podido tampoco ajustar un diálogo constructivo con las autoridades. Los campos tienen lo que se llama una "rentabilidad negativa", es decir, que dan pérdidas en lugar de ganancias, lo que abarca tanto los precios de venta de sus productos como el creciente costo de todos los insumos y servicios productivos. Los problemas de colocación parecen insalvables de momento: no hay mercado interno pues impera la recesión, ni externo porque los precios no son competitivos con la actual paridad monetaria. Es explosiva la dotación de ganado de los campos, que ha llegado a una acumulación sin precedentes de animales preparados que no se han podido vender, y que comporta insostenibles erogaciones. Es creciente y agobiante el endeudamiento a corto plazo y con intereses usurarios, lo que ha colocado a la inmensa mayoría de los productores al borde de la ruina.

La Federación Rural, ante este panorama, denuncia el estado de moratoria generalizada, exhorta a productores y sociedades rurales a no participar en ejecuciones de campos y maquinarias y exige la prohibición de venta de tierras a extranjeros - como forma de preservar el patrimonio nacional ante la difícil coyuntura que vive el país.

La solución de este problema parece compleja dentro del deprimido cuadro nacional y teniendo en cuenta la línea impulsada por el gobierno y concentrada en un planteo monetarista, de liberalidad para el capital financiero y en el que lo especulativo rige el mercado. Incluso con la duplicación de los precios en los productos agropecuarios y cambiando sustancialmente la paridad del dólar a fin de posibilitar una buena venta de ganado hacia el exterior, los productores rurales tendrán que trabajar de ahora en adelante sólo para pagar los intereses usurarios, los bancos y un mecanismo estatal costoso e inflado por el bien nutrido aparato represivo.

Los días peores

Este crítico panorama se desenvuelve dentro de un marco social muy contaminado. El Uruguay, nación tradicionalmente inmigratoria, ha visto en estos últimos años cómo la quinta parte de su población abandonaba el país. Ha sustentado a un tiempo el triste privilegio de tener la mayor cantidad de presos políticos en relación con su población. Y paralelamente ha perdido una característica esencial, como era la de tener el menor número de analfabetos en América Latina. Su población escolar actual ha disminuido en términos absolutos si se la compara con la de los años anteriores al golpe de Estado. La enseñanza primaria ha visto cómo se destituyó a todo su cuerpo inspectivo y al 30 por ciento de los maestros y directores, que fueron sustituidos por personas sin formación profesional, y dándose expresa preferencia para el desarrollo de tareas docentes a las esposas de los militares. Con la enseñanza secundaria ha ocurrido algo similar; las cesantías han sido masivas y el personal técnico ha sido sustituido por personal de confianza política; los alumnos - que no pueden realizar reuniones o asambleas - son controlados estrictamente en su forma de vestir; cada liceo está adscrito a un cuartel. La enseñanza superior impartida por la Universidad de la República ha sido vitalmente afectada en su funcionamiento. El personal docente ha sido destituido y en muchos casos se han suprimido materias porque ningún adicto al régimen se ha interesado en ellas. La labor investigativa ha caído verticalmente. Los presupuestos han sido minimizados. Fueron cerrados los Institutos de Economía, Ciencias Sociales, Historia, Filosofía, Historia de las Ideas y el de Servicio de Climatología de la Facultad de Arquitectura. En esta última Facultad quedó vacante el 45 por ciento de los cargos docentes, y en la de Ingeniería 67 por ciento.

Pero mientras todos estos factores se ciernen sobre un gobierno aislado y represivo, prisionero de sus propios mandantes y abroquelado para ganar tiempo, en los más diferentes sectores y en condiciones difíciles, la oposición trata de abrir cauces ante el encadenamiento de los hechos. El desprestigio de un régimen que no ha logrado ninguno de los objetivos mencionados se patentiza en la medida en que las fuerzas que lo adversan han ido conquistando espacio político pese a las dificultades y presiones.

La crisis económica no ha llegado al quiebre porque en algunos momentos circunstancias ajenas han oficiado de oxigenantes a la par que hechos internacionales revertían internamente. El camino uruguayo hacia la normalización democrática no parece sencillo ni breve, pero menos sencillo aún es para el gobierno seguir jugando a una apertura que se niega a conceder, mientras sus frentes se fisuran y sus contradicciones se amplían.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 60 Mayo-Junio de 1982, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.